



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintidós de julio de dos mil veinte**

#### **S17-138**

Proceso: **ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN**  
Demandante: **MARTHA LUCÍA FLOREZ ÁLVAREZ**  
Demandado: **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**  
Litis consorcio: **HECTOR FLÓREZ MONTOYA y a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDELLÍN –ASOTRAMED-**  
Intervinientes: **LUZ ELENA JARAMILLO YARCE junto con sus hijas CINDY DANIELA y VALENTINA GARCÍA JARAMILLO respectivamente.**  
Radicado No.: **05001-31-05-014-2012-00993-01**  
Tema: **pensión sobrevivientes- efectos de la afiliación ARL a través de un tercero – cobertura.**  
Decisión: **CONFIRMA CONDENA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la administradora accionada dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 18** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

#### **1.1. LO PRETENDIDO**

Pretende la **demandante** el reconocimiento de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el fallecimiento del señor LEÓN ALBEIRO GARCÍA MAZO, quien afirma era su compañero permanente, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

Afirma que el afiliado falleció el 26 de septiembre de 2011 por un impacto contundente de cráneo, fruto del desplome repentino de unas escaleras del sexto piso de la edificación que realizaba YB CONSTRUYE S.A.S., en la que se encontraba ejerciendo su actividad como obrero de construcción, servicios que prestaba de manera independiente, razón por la cual los pagos al sistema de seguridad social se efectuaban a través de ASOTRAMED, concretamente mediante su representante legal, señor JHON MARIO MARULANDA ARIAS, quien reportó el accidente de trabajo ocurrido en la jornada habitual de trabajo, oportunidad en la que equivocadamente se plasmó que era el empleador y que la actividad económica de la asociación era la contabilidad, auditoría y asesoría en materia de impuestos.

Añade que hizo comunidad de vida constante y singular con el causante desde el 2005, es decir, por más de 5 años, de quien dependía económicamente dado que no disfrutaba de pensión, no trabajaba, ni tenía rentas.

También señaló que el 11 de enero de 2012 POSITIVA manifestó la imposibilidad de reconocer alguna prestación, argumentando que la actividad desarrollada al momento del accidente era diferente a la reportada en la afiliación, aunado a que el occiso se encontraba subordinado a persona diferente al señor Marulanda Álvarez, desconociendo la entidad la posibilidad que como trabajador independiente le asistía de afiliarse a través de una agremiación conforme lo previsto en el art. 3 del Decreto 3615 de 2005.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**Controvirtió POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** el derecho pretendido precisando que el afiliado, quien falleció por una caída accidental, al momento del deceso se encontraba realizando labores para el señor HÉCTOR FLOREZ, quien mediante declaración aceptó tal situación, persona distinta a la COOPERATIVA ASOTRAMED que lo afilió como su trabajador dependiente, razón por la que se opuso al reconocimiento de las prestaciones económicas deprecadas

Pese haberse surtido la correspondiente notificación personal, NO se pronunciaron ni el señor HECTOR FLÓREZ MONTOYA, ni la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDELLÍN – ASOTRAMED-.

Respecto de los intervinientes *ad excludendum*, habrá de indicarse que ante la imposibilidad de ubicarlos, el despacho nombró curadora *ad litem* para que los representara, auxiliar que se abstuvo de formular demanda al NO contar con la información necesaria para ello.

#### 1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2017 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito Medellín, se **CONDENÓ** a POSITIVA S.A. a reconocer y pagar a la demandante el 50% de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor LEÓN ALBEIRO GARCÍA MAZO, y desde el 26 de septiembre de 2011, cuantificando un retroactivo que hasta junio de 2017 ascendía a \$23.508.198, monto que debía indexar al momento del pago, prestación que a partir del día siguiente continuaría reconociendo la entidad en cuantía de un SMLMV, autorizando a efectuar los correspondientes descuentos en salud.

Finalmente **ABSOLVIÓ** a los demandados de las restantes pretensiones incoadas en su contra.

Dentro del término concedido por la ley, la ARL accionada interpuso y sustentó recurso de apelación.

## 2. ARGUMENTOS

### 2.1. DE LA JUEZ

Adujo que:

- Del material probatorio recaudado era dable entender, contrario a lo esgrimido por la demandante y la testigo, que para el momento del accidente de trabajo, el causante NO era un trabajador independiente sino que se encontraba bajo la subordinación del señor Héctor Flórez, y aunque este no fue quien lo afilió a la ARL, sino un simple intermediario, lo cierto es que ello no eximía a la administradora de reconocer la pensión de sobrevivientes deprecada por la compañera permanente del fallecido, la que acreditó una convivencia superior a los últimos 5 años inmediatamente anteriores al deceso, aunado a que la entidad no dio cumplimiento al deber legal en materia de verificación de afiliaciones.
- También aclaró que si bien no era procedente nombrar curador ad litem a las hijas del causante, quien a voces de lo expuesto en el interrogatorio eran menores para el momento

del deceso de su padre, lo cierto es que al reconocer la prestación en un 50%, nada les impedía realizar la correspondiente reclamación para acceder al restante porcentaje.

- Finalmente negó los intereses pretendidos al señalar que mal podría endilgarle una mora a la entidad sino mediaba constancia de que la accionante hubiese elevado alguna reclamación.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA**

- Difería de la interpretación jurídica y valoración probatoria realizada por la a quo, por cuanto aducía que a voces del art. 29 del Decreto 1295 de 1994, no había cumplido con su deber de verificación, preceptiva de cuya lectura otra cosa era lo que se desprendía, toda vez que se refería a la modificación de la clasificación o riesgo y el monto de la cotización y no a la legalidad de una afiliación, que en todo caso NO era una obligación de las administradoras de riesgos laborales sino una potestad.
- Que en el ordenamiento NO existía ninguna disposición que sometiera la afiliación al sistema de riesgos laborales, a un requerimiento previo de documentos sobre la existencia de un contrato de trabajo, por lo que conforme la buena fe que regía un contrato, creía en las manifestaciones que hacían las empresas o personas naturales respecto de cada una de las personas que reportaban como afiliados, siendo ello que lo sucedió en este caso, pues conforme constaba a folio 70 del expediente, al momento de la afiliación SOTRAMED, en calidad de empleadora, reportó al causante como trabajador dependiente de la misma, suponiendo que era esta y no otra la entidad que lo sometía a un riesgo cuando ejercía el poder subordinante, poder que en realidad no desplegó de acuerdo a la verificación de los hechos, pues para el día 26 de septiembre de 2011, era el señor Héctor Flórez quien fungía como empleador toda vez que dentro del trámite de la investigación administrativa emitió una certificación laboral especificando cargo, funciones y horario que realizaba el trabajador León Albeiro García Mazo en servicio suyo.
- Que no se presentó dentro del trámite de dicha investigación, ni en este proceso prueba alguna de que hubiese existido, como lo entendió la juez, una intermediación laboral entre el señor Héctor Flórez y ASOTRAMED, o que existiera un contrato para la administración de la seguridad social de los trabajadores de éste, por lo que la persona que sometió al riesgo al causante NO lo tenía afiliado a la seguridad social al momento de la ocurrencia del accidente, debiéndose tener en cuenta que desde el Decreto 1295 de 1994, inicialmente mencionado, el legislador buscaba proteger al trabajador de los siniestros ocurridos en relación con las

actividades laborales de las que el empleador obtuvo provecho bien sea en el lugar y horas de trabajo o fuera de este pero siempre con la intervención del empleador configurándose el poder de subordinación como uno de los elementos integrantes del contrato de trabajo.

- Que de esa relación contractual surgía para el empleador la obligatoriedad de las afiliaciones al sistema de seguridad social integral, así como también las reglas de las tarifas de cotización basadas en la actividad económica de la empresa y en las políticas y ejecución del programa de salud ocupacional y riesgos creados por el empleador, que surgían también sobre la base de una actividad realmente contratada por el mismo empleador que afilia a sus trabajadores, surgiendo el elemento subordinante que marca la relación a la que está sujeta la persona contratada quien deberá atender las indicaciones de su empleador.
- Que lo acontecido había ocupado la atención de las Altas Cortes en innumerables sentencias, como en la de radicación 41.551 de 2012, según la cual, así el causante estuviera cubierto por el sistema de riesgos, era indispensable que se demostrara la condición de trabajador subordinado del fallecido respecto de la empresa que lo tenía afiliado para efecto de que se reconociera a sus beneficiarios la prestación por muerte, por lo que si jamás medio una relación de carácter laboral, se debía descartar que el evento accidental donde perdió la vida, hubiese ocurrido con causa u ocasión de un trabajo.
- Que igual razonamiento se planteaba en la sentencia 33.180 de 2009, donde se indicó que la responsabilidad por riesgos laborales en principio estaba a cargo del empleador, debiendo asegurar al trabajador a la administradora de riesgos laborales mediante la afiliación, cumpliendo con el pago de las cotizaciones, siendo el empleador el tomador del seguro y el empleado es el asegurado.
- Que a juicio de la falladora el contrato de seguros de riesgos laborales, NO se regía por las normas comerciales del contrato de seguros, sino por las normas relativas a la administración de la seguridad social integral. Sin embargo, pese a que el régimen tenía una regulación especial, realmente se trataba de un contrato de aseguramiento que obviamente se regía por normas comerciales, particularmente la buena fe, insistiendo que era claro que al momento de hacer la afiliación SOTRAMED no se hizo bajo la realidad de las condiciones en las cuales se iba a desempeñar el trabajador, viciándose el consentimiento de la administradora.
- También cita como fundamento de su disenso, las sentencias 22.656 de 2005 donde se señaló que el sistema era objetivo, óptica bajo la cual al beneficiario le bastaba con acreditar

el vínculo laboral y la realización del riesgo con causa u ocasión del contrato de trabajo, y la T-321 de 2010 donde se hablaba de la importancia del diligenciamiento del formulario de afiliación.

- En tal sentido concluye que existe un empleador incumplido frente a su trabajador y al sistema, al no afiliarlo ni cubrir el riesgo al cual se estaba sometiendo, siendo este el que debía responsabilizarse de todas y cada una de las prestaciones económicas derivadas del fallecimiento del causante.

### **2.3. ALEGATOS POSITIVA S.A.**

Señaló que la demandante, señora MARTA LUCIA FLÓREZ en esencia aspiraba a que se declarara que le asistía derecho como beneficiara de la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente supérstite del asegurado León Alberto García Mazo, fallecido en presunto accidente de trabajo.

Empero, consideró que no había lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas pretendidas a cargo de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. al expresamente señalar que:

“(…) en lo concerniente a la legalidad de la afiliación realizada al señor León Alberto García Mazo al sistema de riesgos laborales, quien realizó la afiliación de este último fue la Asociación de Trabajadores de Medellín (ASOTRAMED) a través de su representante legal, como trabajador dependiente de la misma y de la cual se permite dilucidar que era ésta quien lo sometía al riesgo y por ende quien ejercía la subordinación del entonces trabajador Luis Alberto, sin embargo de la investigación administrativa realizada por mi representada se vislumbró que quien verdaderamente ejercía la subordinación en virtud de las actividades encomendadas a su cargo era el señor HECTOR FLOREZ, supuesto acreditable a través de certificación laboral en la cual se reconoció la existencia de una relación laboral entre este y el señor García Mazo. Ahora bien, dentro del plenario no se presentó prueba alguna que demostrase que hubiese existido intermediación entre el señor Héctor Flórez y ASOTRAMED, ni siquiera la existencia de contrato, por lo que quien sometió al riesgo al entonces trabajador no lo tenía afiliado al sistema de riesgos laborales. Entonces, al estar frente a un empleador incumplido en virtud de la omisión de sus obligaciones al no efectuar la afiliación a la administradora de riesgos laborales de quien fungía como su trabajador, es este quien debe responder por las prestaciones económicas a las que haya lugar y no mi representada. En artículo 4 del Decreto 1295 de 1994 contempla las características del sistema general de riesgos laborales, específicamente en sus literales k y E los efectos que traen consigo la afiliación;

**ARTICULO 4o. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA.** El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene las siguientes características:

- a. Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado.

- b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrán a su cargo la afiliación al sistema de y la administración del mismo.
  - c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.
  - d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores.
  - e. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto.**
  - f. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador.
  - g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en el presente Decreto.
  - h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de los empleadores.
  - i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se establecen en este decreto.
  - j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de ATEP, o cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de continuidad, al Sistema General de Riesgos Profesionales que por este decreto se organiza.
  - k. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación.**
  - l. Los empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrá estas entidades administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.
- PARÁGRAFO.** Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la sostenibilidad financiera del Sistema General de Riesgos Laborales.  
(Resaltos del texto)

Al no existir por parte de quien figuraba como verdadero empleador -Héctor Flórez-, afiliación al sistema de riesgos laborales, no puede pretenderse la cobertura y en consecuencia el reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar.

En lo concerniente a la dispuesto en la parte considerativa por el a quo sostiene “... *el mismo artículo 29 del Decreto 1295 de 1994, también establece que la clasificación del riesgo es susceptible de ser modificado por facultad de la misma ARP hoy ARL, cuando verifique que la información contenido en la afiliación no corresponde con la realidad, pudiendo la ARL hacer la modificación de la cotización según las condiciones ocupacionales reales*”

El artículo 29 del Decreto 1295 de 1994 el cual reza:

ARTICULO 29. MODIFICACION DE LA CLASIFICACION. La clasificación que ha servido de base para la afiliación puede modificarse por la entidad administradora de riesgos profesionales. Para ello, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán verificar las informaciones de los empleadores, en cualquier tiempo, o efectuar visitas a los lugares de trabajo. Cuando la entidad administradora de riesgos profesionales determine con posterioridad a la afiliación que esta no corresponde a la clasificación real, procederá a modificar la clasificación y la correspondiente cotización, de lo cual dará aviso al interesado y a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo de su competencia, sin detrimento de lo contemplado en el artículo 91 de este decreto.

De la lectura del presente artículo se desprende que no es una obligación de la administradora de riesgos laborales sino una potestad en lo concerniente a la clasificación del riesgo y la cotización y no sobre la legalidad de la afiliación.

En los términos expuestos solicitó revocar en su totalidad la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín y en consecuencia absolver a POSITIVA COMPAÑÍA

DE SEGUROS S.A. al considerar que NO existía fundamento ni causa jurídica que sirviera de sustento, justificación o soporte a las pretensiones y reclamaciones.

### 3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en establecer si POSITIVA S.A. se encuentra obligada a reconocer la pensión de sobrevivientes a la beneficiaria de quien fallece POR un accidente de trabajo cuando su afiliación al sistema de riesgos laborales se realiza a través de un tercero que NO ostenta la calidad de empleador del causante.

Valga precisar en este punto que si bien la a quo adujo que se enviaría el expediente para que también se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, lo cierto es que ello **NO es procedente**, conforme lo razonado por la Sala de Casación Laboral mediante sentencia de radicación 47.930, donde como juez constitucional analizó este punto, señalando que pese a tratarse la demandada de una entidad descentralizada, la nación no actuaba como garante de sus obligaciones, razón por la que no se cumplían los presupuestos contemplados en el art. 69 del CPT y la SS.

### 4. CONSIDERACIONES

Sabido es que conforme lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012, el Sistema General de Riesgos Laborales tiene como fin proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles **con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan**, definiendo para tales efectos, en sus artículos 3 y 4, las nociones de éstos riesgos cubiertos en similares términos a como en su momento lo hizo la Comunidad Andina de Naciones, concepto al que se acudía para el momento de los hechos. Por su parte, la Ley 776 de 2002 establece cuales son las únicas prestaciones económicas que otorga dicho sistema, entre las que se encuentra la pensión de sobrevivientes que se causa cuando un trabajador fallece producto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Encuentra la Sala que NO suscita controversia la profesionalidad del evento en el que falleció el señor LEÓN ALBEIRO GARCÍA MAZO aquel 26 de septiembre de 2011. Y es que según el reporte realizado por JHON MARIO MARULANDA ALVAREZ, representante legal de la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE MEDELLÍN –ASOTRAMED-, *el trabajador se encontraba desplazándose por las escalas de un sexto piso, de repente se desprendió un peldaño*



*ocasionando a su vez el desplome de estas, causando golpe grave en todo el cuerpo, lo cual desencadenó la muerte del trabajador. Hora del fallecimiento: 10.00 AM. Además se registró que ello ocurrió cuando se desempeñaba como obrero de construcción de edificios, actividad a la que se dedicaba “dentro de la empresa” desde el 6 de octubre de 2010.*

Realmente el aspecto controvertido es la **cobertura**, toda vez que la administradora señala que la sociedad pagadora de los aportes no era para la que prestaba el servicio al momento del accidente, siendo el verdadero empleador el señor HÉCTOR FLÓREZ. Tal fue la tesis que sostuvo cuando el 11 de enero de 2012, mediante misiva dirigida a JHON MARIO MARULANDA, adujo que no era posible para Positiva Compañía de Seguros S.A. reconocer prestación alguna derivada del accidente presentado.

En otras palabras la ARL arguye que quien se subrogó en el riesgo fue el contratante, para el caso ASOTRAMED, asociación que figuraba en el sistema como el empleador del señor León Albeiro Mazo, la que a su vez, conforme respuesta a derecho de petición que obra a folios 48 a 50 del expediente, se abrogó tal calificativo, explicando que a través de la misma únicamente se prestaban servicios de afiliación para trabajadores independientes al sistema de seguridad social, siendo el causante un agremiado, quien mensualmente consignaba la totalidad del aporte más \$17.000 de costos de administración, a cambio de pagar la correspondiente cotización y brindarle una asesoría personalizada, registrar novedades, gestionar cobro de incapacidades, reportar accidentes de trabajo, solucionar inconsistencias, entre otros.

Es así como al interior del proceso se plantea, contrario a lo esgrimido en el libelo genitor, que el señor León Albeiro García realmente NO prestaba sus servicios como independiente, sino que para el momento del accidente fungía como trabajador del señor HECTOR FLOREZ MONTOYA.

Tal información se apoya en el certificado que data del 13 de octubre de 2011, es decir, cuando ya había fallecido el causante, documento expedido por el señor Flórez a solicitud de la ARL donde se anota como cargo ejercido por el señor Albeiro la de ayudante de construcción y como funciones las de suministro tanto de materiales como arena, cemento, adobes, hierro, como de herramientas y preparación de material para limpieza, resanes, llenado, mezclas, andamios, taleras, talcos, cerchas, etc. Aunado a ello el señor Héctor registra que la actividad ejercida el día del accidente era la de suministro de arena de pega para la instalación de puertas, que el contrato era a término indefinido, especifica el monto devengado mensualmente y el horario de trabajo cumplido por el causante.

También se allega al expediente una colilla de pago de nómina, véase folio 70, correspondiente a la última quincena percibida por el causante. Se desconoce su creador pero se anotan lo causado durante cada día, además de las horas extras.

A juicio de la Sala, si bien ambos documentos evidentemente comportan prueba indiciaria de que el causante NO era un trabajador independiente, lo cierto es que ellos por sí solos no llevan al convencimiento acerca de que en efecto el causante fuese trabajador de su amigo, pues el señor Héctor Flórez así fue identificado por la compañera permanente del causante, quien por demás era un vecino, señalando que trabaron juntos en varias obras donde fueron llamados.

Es verdad que poco le puede constar a la demandante acerca de cómo eran las dinámicas al interior de la edificación en que murió su compañero, al no ser un testigo de tales hechos. Empero, más allá de ello, debe recordarse que en materia laboral existe un principio según el cual prima la realidad sobre la formalidad, por lo que un simple certificado laboral, NO puede, por lo menos no sin darse el correspondiente debate probatorio, servir de sustentó para afirmar, sin lugar a dudas, que el causante era trabajador del señor Héctor Flórez, en los términos que lo dispone en el art. 23 del CST

No obstante lo anterior, al margen de tal discusión, es dable concluir que ASOTRAMED sí era un tercero a través del cual el causante se afilió y posteriormente efectuó los pagos al sistema de riesgos laborales, la que por demás no se encuentra en el listado de agrupadoras que en los términos normados por los Decretos 3615 de 2005 y 2313 de 2006, están autorizadas para fungir en dicha calidad por el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que consultada la página oficial de la entidad, la misma no se registra como tal.

Bajo este contexto debemos preguntarnos si surte o no efectos la afiliación que se realiza a través de un tercero y si hay una responsabilidad frente a la cobertura de la contingencia laboral por parte de la administradora aquí accionada.

Al efecto habrá de indicarse que, aunque la afiliación es irregular, a juicio de la Sala la misma esta llamada a surtir efectos por las razones que a continuación se exponen:

Según lo previsto en el literal e) del artículo 4° del Decreto 1295 de 1994, una de las características en que esta cimentado el sistema general de riesgos laborales, antes denominado de riesgos profesionales, es que el empleador que no afilie a sus trabajadores, además de las sanciones legales, sea responsable de las prestaciones que le hubiesen correspondido reconocer

a la administradora. En tal sentido, no es dable castigar con igual rasero a quien omite realizar la correspondiente afiliación, a quien por el contrario la hace, aunque sea en forma irregular y efectúa el pago de las cotizaciones.

Caso diferente sucede cuando una persona labora para dos personas diferentes, dígase jurídicas o naturales, y al servicio de una de ellas ocurre un accidente de trabajo; en tal evento no es dable pretender que la administradora de otro de sus empleadores responda por las prestaciones de aquel suceso.

Sin embargo, tal y como se analizó, no es ello lo que ocurre aquí, pues se trata de una persona que únicamente ejercía actividades en el gremio de la construcción, en cuyo desempeño justamente falleció, momento para el cual se encontraba afiliado a través de una agremiación no autorizada por el correspondiente ente ministerial que vigila y regula su funcionamiento, desconociéndose de quien provenía el dinero para pagar los aportes, es decir, si directamente del causante o de un presunto empleador.

Pese a ese desconocimiento, la afiliación cumple con su fin que no es otro diferente al de subrogarse en el pago de las prestaciones, para el caso la pensión de sobrevivientes deprecada, que bajo la óptica de la ARL sería responsabilidad del señor Héctor Flórez pese a que, como se dijo, NO existe certeza de su calidad de empleador.

En todo caso, de avalar la teoría de la administradora aquí demandada, podría incluso configurarse un enriquecimiento sin justa causa, dado que POSITIVA estaría percibiendo unos aportes respecto de los cuales realmente nunca acaecerá algún riesgo de los cubiertos por el sistema, toda vez que el causante NO se desempeña como trabajador de ASOTRAME sino que, se insiste, tal asociación era un tercero a través del cual, más allá de estar o no legalmente constituida, se efectuaban los pagos al sistema, siendo este su único objeto social conforme se aprecia en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio.

De otro lado, la Ley 1562 de 2012 en su art. 12 literal g), pese a que se expidió con posterioridad a la ocurrencia del accidente de trabajo, estableció como uno de los objetos del fondo de riesgos laborales, el de adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores del Sistema, dentro del ámbito de su competencia, regulando además el asunto relativo a las visitas periódicas, obligación que de antaño de alguna forma también contemplaba el art. 6 del Decreto 1772 de 1994, al señalar que las hoy ARL, tras presentarse la novedad de afiliación de un trabajador, debían verificar si la clasificación efectuada por la empresa correspondía a la real.

Así pues, si la entidad no rechazó la afiliación, recibió los aportes, nunca ejerció ninguna acción de control respecto a la veracidad de los datos suministrados, alterados no por mala fe sino más bien por desconocimiento de la ley, no puede pretender ahora discutir la validez de los mismos con posterioridad a la ocurrencia del riesgo con el fin de liberarse del pago de las prestaciones económicas, máxime si su actuar generó una expectativa en el afiliado, hoy causante, quien legítimamente confió en que el pago cubría los riesgos o contingencias propias de la labor ejercida.

Lo anterior aunado a que un estudio integral de las normas que regulan el sistema de riesgos laborales, deja entrever en su génesis, que un error en cuanto al lugar de prestación de servicios no necesariamente debe acarrear la inexistencia de la afiliación, sino más bien otro tipo de sanciones, incluso de carácter pecuniario.

Las normas de seguridad social, si bien contienen obligaciones para las partes, sanciones y prestaciones restrictivas para los eventos de muerte, también se fundamentan en principios inspirados en el respeto e igualdad de las personas, como la solidaridad, universalidad, integralidad, irrenunciabilidad, entre otros, llamados a proteger a la parte vulnerable frente a un sistema conformado por empresas administradoras no sólo de servicios, sino también de recursos, debiéndose someter a los afiliados tanto a las disposiciones legales como a dichos principios; así lo ha estimado también la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad y de tutela, a través de las cuales se ha resaltado la protección de los afiliados en determinadas circunstancias, así por ejemplo, en sentencias como la T-336 de 2016, 721 de 2012, 807 de 2014, última en la que recordó que hay *un sistema de aseguramiento mediante el cual los empleadores contratan con una ARP la protección de sus trabajadores frente al riesgo que representa para ellos el ejercicio de su actividad laboral. De ahí que se apoye en un régimen de responsabilidad objetiva, cuya prioridad es la protección integral, oportuna y eficaz del trabajador frente a aquellas eventualidades que menoscaban su salud y su capacidad económica.* Y más adelante precisa que “(...) los debates sobre la eventual responsabilidad en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas contempladas por el SGRL a favor de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o cualquier otra contingencia de las amparadas por el sistema, deben resolverse desde una perspectiva afín con la categoría de derecho fundamental que la Constitución le reconoce a la seguridad social, con el principio de continuidad que le es intrínseco y con el esquema de aseguramiento que diseñaron el Gobierno y el legislador para hacer realidad las garantías de integralidad, oportunidad y eficacia hacia las que apunta el sistema.”

Aunado a ello, la misma corporación mediante sentencia T-935 de 2007, concluyó que las deficiencias en la afiliación al sistema de Riesgos Profesionales no pueden dejar sin efectos los derechos de los afiliados. En tal oportunidad analizó un caso de aristas similares a este, de una persona que no tenía vínculo laboral con la empresa por medio de la cual se inscribió a dicho sistema, evento en el que recordó que el objeto del mismo estaba centrado en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, lo cual desbordaba el interés de si el desempeño laboral se realizaba mediante contrato de trabajo o como trabajador independiente, destacando además su carácter universal y vinculante, aunado a que los aportes se realizaron de buena fe, con ánimo exento de fraude.

Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 25725 indicó que:

... la Administradora de Riesgos Profesionales que está instituida para proteger tanto a trabajadores subordinados, independientes y asociados, luego de recibir la afiliación de cualquiera de estos, no le es dable sostener que no le cabe obligación o responsabilidad alguna, pues ello no tiene sentido, precisamente porque cuando la cooperativa a la cual pertenecía el occiso, se decide por la protección de la seguridad social a través de la ARP demandada, quedó subrogada en los riesgos profesionales, cumpliendo así con las preceptivas de los artículos 9 y 15 del Decreto 468 de 1990, quedando la accionada obligada a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado, en los términos del ordenamiento vigente para la época.

Similar razonamiento expresó nuestro órgano de cierre mediante sentencia 76.211 de 2020, oportunidad donde examinó un caso de aristas similares a este, incluso contra la misma administradora aquí demandada, donde concluyó que a la ARL no le era dable eximirse de la responsabilidad frente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del causante, quien era albañil, pese a que la afiliación del trabajador fallecido se hubiese realizado a través de un tercero. Expresamente adujo que:

De lo que viene expuesto no surge ninguna duda que se equivocó el Tribunal cuando a pesar de encontrar acreditado dentro del proceso que al momento del acaecimiento del accidente de trabajo en el cual perdió la vida ..., este se encontraba afiliado a la Administradora de Riesgos Profesionales demandada y realizando las cotizaciones correspondientes de manera oportuna, le quitó todo efecto a dicho acto jurídico, con el argumento de que no se aportó prueba de un vínculo laboral del causante con la persona que lo afilió y realizaba los aportes a la ARL, sosteniendo erradamente que *«[...] así el causante éste cubierto en materia de riesgos profesionales es indispensable que se demuestre la condición de trabajador subordinado del fallecido respecto de la empresa que lo tiene afiliado, a efectos de que se reconozca a sus beneficiarios la prestación por muerte»*, pasando por alto que las ARL están instituidas para proteger tanto a trabajadores subordinados, como independientes y asociados, luego de recibir la afiliación de cualquiera de éstos.

En este orden de ideas, por las razones antes expuestas, se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada, pues aunque medió una afiliación que podría tildarse de irregular, dado que a voces de quien afilió al causante este NO era su trabajador, lo cierto es que en este caso, a juicio de la Sala, la misma surtió efecto, y el pago de las cotizaciones realizado, aunque fuese a través de un tercero, tiene la virtualidad de subrogar en el sistema el reconocimiento de la prestación deprecada, y en todo caso no puede afectarse a la beneficiaria por dicha circunstancia administrativa cuando no medio ningún tipo de control por parte de la administradora, quien aprobó la afiliación con una agrupadora, pues ello con facilidad se desprendía del Certificado de Existencia y Representación, ningún reparo efectuó, mucho menos algún tipo de investigación.

Se condenará en costas a la entidad demandada por haber salido vencida en juicio. En esta instancia se fijará como agencias en derecho la suma de \$877.803.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### DECIDE

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 21 de junio de 2017 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso promovido por la señora **MARTHA LUCÍA FLÓREZ ÁLVAREZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 39.354.350 contra **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** trámite al que se vinculó como Litis consorcio necesario por pasiva al señor HECTOR FLÓREZ MONTOYA y a la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDELLÍN –ASOTRAMED- y como intervinientes ad excludendum a la señora LUZ ELENA JARAMILLO YARCE junto con sus hijas CINDY DANIELA y VALENTINA GARCÍA JARAMILLO respectivamente, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$877.803.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(firmas escaneadas)

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS No. 096 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 23 de JULIO DE 2020

\_\_\_\_\_  
Secretario